

Editorial

Más allá de las elecciones

En los dos años posteriores a la firma de los acuerdos de paz, El Salvador ha cambiado indudablemente, pero no lo ha hecho tal como el gobierno, la derecha y la misión de Naciones Unidas lo afirman. Estos suelen argumentar que El Salvador de 1994 no es el mismo que el de 1989. En esto tienen toda la razón. Pero de lo que se trata no es de introducir o constatar unos cuantos cambios, por otro lado inexorables, dada la estructura y la dinámica del tiempo, sino de los cambios negociados en los acuerdos de paz.

El pasado no es el único punto de referencia para considerar cuánto ha cambiado El Salvador y para constatar lo lejos que el conflicto armado se encuentra en la actualidad. Tampoco se trata de cambiar por cambiar. El criterio para determinar la ejemplaridad del proceso salvadoreño no se encuentra en el pasado ni en el cambio en sí, sino en si el país camina por la ruta señalada por los acuerdos de paz.

Desde esta perspectiva, el proceso salvadoreño tiene aún mucho camino que recorrer y aún debe dar pasos muy trascendentales, por lo tanto, no se puede hablar de su ejemplaridad con la facilidad con la que lo hacen los funcionarios gubernamentales y de Naciones Unidas, quienes no pierden oportunidad para señalar que cualesquiera de sus momentos es histórico así como de atribuirle toda suerte de bondades sin mayor fundamento. Al actuar así ocultan sus responsabilidades y encubren la realidad.

Objetivamente, hay que reconocer que la negociación, con todas sus limitaciones, ha sido positiva y a ella responden los cambios ocurridos. Pero falta el paso más difícil de todos, el cual no puede ser obviado, la reconciliación. Quedarse en la negociación sin dar el paso siguiente, es permanecer en el final del conflicto armado con todos los problemas del país sin resolver y, por lo tanto, con el origen de la guerra presente.

Las brechas abiertas por la guerra continúan sin cerrarse e incluso se abren más.

La persistencia de tales problemas implica que el país se encuentra ahí donde comenzó el conflicto armado. Es decir, después de once años de guerra habríamos aprendido muy poco. Sólo habríamos conseguido constatar la inviabilidad de luchar por los cambios con las armas, pero seguiría siendo válido continuar esa misma lucha con otros medios. Luchar políticamente por los ideales no es malo, lo condenable es seguir luchando por lo mismo que hace once años, como si nada hubiese ocurrido en el país. Por eso mismo, el siguiente paso previsto por los acuerdos, la reconciliación de El Salvador, es necesario y urgente.

Sin reconciliación es imposible dar por concluidos los acuerdos de paz, es una falacia considerar satisfactorio el cumplimiento de los compromisos adquiridos, es un encubrimiento de grandes proporciones presentar ante la comunidad internacional el proceso salvadoreño como un ejemplo y es un mal gravísimo para el país. La reconciliación no ha sido posible ni es querida conscientemente, al menos por una de las partes. La falta de reconciliación es lo que, en el fondo, está impidiendo considerar que el proceso electoral actual sea completamente libre y limpio así como también cuestiona su credibilidad.

1. La continuidad de la conflictividad social

Nadie puede discutir que el conflicto armado en El Salvador concluyó hace dos años por medio de la negociación entre el gobierno y el FMLN, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Según lo acordado, la negociación debía ser seguida por una reconciliación nacional. Pero al no haberse dado este segundo paso trascendental, el conflicto social no ha desaparecido, sino que continúa caracterizando la realidad salvadoreña. Que en la actualidad se exprese en forma distinta a como se expresó durante el conflicto armado, no significa que haya desaparecido. Más aún, el conflicto se expresa virulentamente y, lo que es más grave, por las mismas razones por las cuales el país llegó a la guerra, la negativa a compartir más equitativamente los recursos naturales y humanos entre quienes tienen mucho y quienes son despojados de la poca tierra, oportunidades de vida y trabajo que tienen. Las armas son distintas, pero el conflicto continúa siendo el mismo, lo cual implica, por otro lado, un desperdicio de recursos y energías que estarían mejor empleados si hubiese una concertación en la cual se acordaran unas metas comunes mínimas, orientadas al beneficio de todos los salvadoreños.

El conflicto se presenta en todos los ámbitos de la vida nacional, estén o no vinculados con el cumplimiento de los compromisos adquiri-



dos en los acuerdos. Toda la actividad nacional así como cualquier decisión es considerada desde esta perspectiva. Los políticos promueven aquello que favorece el avance o la consolidación de sus posiciones y rechazan todo aquello que pueda favorecer al contrario. Esta aproximación a la realidad nacional impide pensar en términos de los intereses y del bienestar común. Ni siquiera hemos sido capaces de construir un monumento para recordar a las víctimas del conflicto y honrar su memoria. El único intento hecho en este sentido se ha convertido en una farsa al negarse a reconocer a las víctimas y, por lo tanto, al manipular groseramente la resurrección de Cristo. En realidad, no podía ser de otra manera, porque un monumento como el recomendado por la Comisión de la verdad supone previamente la reconciliación del país que es, precisamente, lo que estamos echando en falta.

Aparentemente, a los actores políticos del proceso de transición les resulta legítimo e incluso deseable continuar con el conflicto con otros medios, sin asumir la responsabilidad para convertirse en constructores de la reconciliación nacional. Al absolutizar la representatividad de la sociedad, los partidos políticos disponen del poder de una forma arbitraria e incontrolada.

A la Fuerza Armada quizás le satisface esta situación en cuanto mantiene abierta la posibilidad obtener el triunfo que no obtuvo militarmente. El sector más reaccionario de la empresa privada también promueve el conflicto, movido más por el revanchismo social que por una visión empresarial moderna. Las fuerzas y las organizaciones sociales tienden a desentenderse de su responsabilidad, temerosas e inseguras aún sobre

el papel que les corresponde en la construcción de la reconciliación, aunque hay signos alentadores en sentido contrario. La comunidad internacional se conforma con poco y no parece preocuparle demasiado la continuidad del conflicto, con tal de que el país no regrese a la guerra formal.

Mientras tanto, las brechas abiertas por la guerra continúan sin cerrarse e incluso se abren más. La violencia común y política sigue siendo el dato más chocante del país. Así lo muestran las encuestas de opinión pública y la prensa nacional. En 1993, ésta última registró 1,217 muertes violentas, 463 atribuidas a la delincuencia común, 357 atribuidas a desconocidos, 246 víctimas asesinadas en circunstancias no identificadas, 69 atribuidas a los escuadrones de la muerte, 68 a explosión de granadas y 14 atribuidas a los cuerpos de seguridad. Mientras no se investigue y se demuestre lo contrario, los asesinados por desconocidos y en circunstancias no identificadas, que suman la mayoría, se pueden atribuir a los escuadrones de la muerte; aparte de los 69 asesinatos atribuidos directamente a estos grupos ilegales. Los escuadrones de la muerte todavía forman parte de este sombrío panorama de irrespeto al derecho primario a la vida. Estos datos, sin embargo, no deben llevarnos a olvidar lo más hondo. El problema de siempre, el que originó la represión y la guerra en el pasado, el que se encuentra en la raíz de la delincuencia y de la descomposición social, y el que impide la reconciliación nacional, la pobreza cada vez más extensa y profunda de El Salvador.

La política económica neoliberal al mismo tiempo que genera riquezas en un extremo muy reducido de la pirámide social, en el otro sigue extendiendo y profundizando la pobreza, cuya manifestación más chocante es la existencia de hambre y enfermedad en el pueblo salvadoreño. La riqueza derivada del crecimiento económico de los últimos cinco años sólo ha beneficiado a unos pocos. Según el Banco Central de Reserva, en 1990, el total de salarios percibidos ascendió a 11,754 millones de colones; mientras que las ganancias de las empresas sumaron 21,692 millones de colones. En otras palabras, al millón y medio aproximado de asalariados le tocó 7,839 colones por cabeza; mientras que unos 20 mil empresarios se apropiaron de más de un millón de colones cada uno. En promedio, cada capitalista gana más de 127 veces lo que el asalariado promedio. Por cada punto que crece la economía, dos tercios se lo llevan los capitalistas y un tercio los trabajadores.

El discurso oficial intenta encubrir esta desigualdad tan dura e injusta con sus sus silencios —el Ministerio de Planificación no informa sobre cuántos ganan 100 mil o más colones—, sus falsas promesas y sus falacias, pero su volumen es tal que es imposible ocultarlo del todo.

Mientras tanto, el planteamiento y la solución estructural de esta situación se pospone, de tal manera que casi se llega a dar por sentado que, inevitablemente, para una buena proporción de salvadoreños es imposible vivir en el país que los vio nacer. A éstos no les queda más alternativa que buscar otro lugar para sobrevivir, preferentemente Estados Unidos, o esperar paciente y resignadamente la muerte lenta de la pobreza extrema.

Todo esto quiere decir que, aunque haya habido un cambio político importante, en lo fundamental, la injusticia, el silencio y la mentira siguen predominando para encubrir. En su reciente comparecencia ante la nación, el presidente Cristiani no hizo referencia explícita a la reconciliación, en parte porque no fue preguntado por ella, lo cual es en sí mismo un indicador de lo poco que interesa; en parte, porque quizá hubo un acuerdo previo sobre lo que se podía y lo que no se podía preguntar al presidente. Tampoco explicó con claridad las bondades del plan económico de su gobierno; si lo hubiera hecho, hubiese tenido que reconocer que sólo ha favorecido a los más ricos de los ricos, mientras que a los pobres sólo les ha concedido unas migajas de la riqueza nacional por medio de unos programas sociales que son a todas luces insuficientes para aliviar la extensión y profundización de la extrema pobreza. Por otro lado, el alivio que pudieran proporcionar esos programas se reduce por la pesada carga del impuesto indirecto que es, de hecho, más elevado para quienes tienen menos.

Todavía no hemos aprendido las lecciones del pasado. Se prefiere mentir para ocultar la dramática situación de la mayoría de los salvadoreños y así posponer soluciones radicales. El encubrimiento puede parecer menos burdo ahora, pero el discurso oficial sigue siendo tan prepotente e interesado como en el pasado. Engañosamente se piensa que se puede convivir con el conflicto social o quizás se sueña que se podrá salir de él de alguna manera no especificada, en cualquier caso, sin adoptar ninguna medida que implique costos sociales y políticos.

2. La dinámica del conflicto

El sector privado más rico ya se ha pronunciado claramente por conservar sin modificaciones la política económica del gobierno actual, lo cual, aparte de continuar enriqueciéndolo, es contrario a la doctrina neoliberal misma. Los cambios son inevitables, aun desde la perspectiva neoliberal, porque el gobierno actual sólo ha estabilizado frágilmente la economía, sin ningún ajuste estructural.

El cambio que promete la propaganda oficial es para que mejoren los que ya se encuentran bien.

Naturalmente, ARENA tampoco quiere cambios. El llamado sector modernizante no los necesita, puesto que se ha beneficiado al máximo con las políticas del gobierno actual; tampoco está dispuesto a promoverlos con la determinación necesaria, aun cuando éstos lo beneficiaran empresarialmente, pues carece de voluntad para enfrentar de una vez por todas al sector más reaccionario del partido y del capital. Al final, acaba plegándose a las exigencias de éste.

Las reformas que están en juego no son sólo económicas, sino también y en primer lugar políticas. Se pretende conservar la hegemonía larvada de la Fuerza Armada sobre el gobierno y la sociedad, que la Policía Nacional Civil y la Policía Nacional estén al servicio de los poderosos como antes lo estuvieron los ya disueltos cuerpos de seguridad, que el sistema judicial se mantenga inoperante para seguir contanto con la impunidad, que la población siga desconfiando de la institucionalidad estatal para que no reclame sus derechos y que siga atemorizada para que no se movilice. Todo ello resulta importante para salvaguardar la injusta estructura económica actual.

A lo largo de estos dos años de acuerdos, ha quedado en evidencia la voluntad de ARENA y de su gobierno para cambiar lo menos posible la estructura de poder del país y así volver a lo de siempre, a una sociedad que facilita el bien vivir de una minoría. En cualquier caso, el cambio que promete la propaganda oficial es para que mejoren los que ya se encuentran bien. Como no hay disposición para intentar vivir de otra manera, es decir, para establecer unas estructuras sociales que permitan convivir con los pobres, el cambio prometido excluye a la mayoría de los salvadoreños de sus beneficios. La reconciliación necesaria y verdadera consiste en hacer posible esa convivencia.

El FMLN, además de negociar el final de la guerra, buscaba introducir algunos cambios importantes, precisamente, en aquellos ámbitos donde el gobierno y ARENA no los desean. El FMLN esperaba abrir espacios para transitar hacia la democratización y desde ellos impulsar los cambios socio económicos que no fueron negociados. Si el FMLN ganase las elecciones, lo más probable es que desde el poder del Estado intentase impulsar estos cambios que no pudo impulsar como parte de la negociación.

Por eso, para ARENA resulta de vital importancia obtener un triunfo electoral total, de tal manera que pueda asegurarse el control absoluto de los tres órganos del Estado en la primera vuelta. A pesar de ser un partido tan joven, ARENA pretende funcionar como una versión salvadoreña del Partido Revolucionario Institucional mexicano de la década pasada. Paradójicamente, su ideal es un modelo de partido y de gobierno que ya se considera obsoleto en los países latinoamericanos que los

tuvieron y en el cual se están introduciendo modificaciones aceleradamente. En otras palabras, en El Salvador no parecemos caer en la cuenta de los cambios que están ocurriendo en la región. Si ARENA obtuviera el control de los órganos del Estado, al igual que en los últimos cinco años, ejercería el poder de manera vertical y autoritaria. A esto se debe que en las filas del partido de la derecha por excelencia asome el pánico cuando piensa en la posibilidad de no ganar en la primera vuelta o de no retener el poder total. ARENA no está dispuesto a gobernar con una oposición fuerte.

Para conseguir ese triunfo aparentemente tan necesario, ARENA piensa que lo más eficaz es hacer una campaña electoral confrontativa hasta el extremo de polarizar la sociedad, como en la época de la guerra. Las encuestas de opinión pública muestran esta polarización con bastante claridad al cruzar las variables relacionadas con la valoración de la situación actual. En cada uno de los extremos opuestos aparece la misma proporción de población, una a favor de ARENA y la otra a favor del FMLN. La tercera parte de la población se coloca al margen de esa confrontación.

Así, pues, la contienda electoral se plantea en términos de confrontación entre las dos partes que pelearon la guerra. ARENA identifica a sus adversarios políticos como sus enemigos. Los llama "delincuentes terroristas", recogiendo un término acuñado por la Fuerza Armada para referirse al FMLN durante la guerra. Al considerar al adversario o a la oposición como el enemigo, ARENA se permite recurrir a toda clase de medidas, incluidas ilegalidades como excluir a una proporción considerable —y aún desconocida— de ciudadanos del registro electoral, violar el código electoral en lo referente a la propaganda electoral, ejercer presión y amenazar a posibles candidatos de terceros partidos que podrían restarle votos, manipular la aplicación del código electoral en beneficio propio, etc.



ARENA considera que al enemigo del partido y del país se le debe impedir el acceso al poder por la vía electoral e incluso se le debe negar la posibilidad de convertirse en una oposición fuerte. Esta contienda electoral confrontativa comprende también el asesinato político. Curiosamente, al igual que en el pasado, después de una serie de presiones, incluida una visita de un alto funcionario del Departamento de Estado, esta violencia política ha cedido sin mayor explicación. Al identificar a la coalición FMLN-Convergencia Democrática-Movimiento Nacional Revolucionario como el enemigo número uno del país sólo se alimenta la polarización, obligando al electorado a pronunciarse por una de esas dos opciones. Los pactos solemnes de respeto mutuo firmados por los partidos políticos se han quedado en el papel así como las promesas de hacer una campaña de altura se han quedado en meras palabras; sólo han servido para encubrir la realidad confrontativa de la contienda electoral.

La coalición, en especial el FMLN y Convergencia Democrática, se ha convertido en el otro extremo de la polarización por sus antecedentes y por el potencial de cambio social que representa. Ciertamente, la coalición no ha respondido en los mismo términos de ARENA, sino que más bien se ha mostrado cautelosa, prudente y hasta tímida, quizás para no caer en la trampa de la confrontación, para honrar el pacto firmado, para presentar una nueva imagen y, o por carecer del potencial político necesario para ello. Muy a su pesar, sin embargo, no puede rehuir la confrontación con el que la provoca deliberadamente. Si bien el FMLN ha hecho un esfuerzo para integrarse en el sistema político, éste no lo ha aceptado como adversario legítimo, sino que lo sigue considerando como un enemigo peligroso. La posición que ARENA y la coalición ocupan en la papeleta electoral para elegir presidente es una expresión simbólica de la situación del país, cada uno se encuentra en el extremo superior opuesto.

El pasado que tanto temor suscita en ARENA es, contradictoriamente, el elemento que más está explotando para alimentar la confrontación. En efecto, ARENA no desaprovecha ninguna oportunidad para vincular al FMLN y a Convergencia Democrática con la lucha guerrillera. Sin embargo, no hay que olvidar que ARENA tiene el tejado de vidrio, dado que la documentación disponible lo vincula estrechamente con los escuadrones de la muerte, con la represión estatal y con las peores violaciones de los derechos humanos. El partido que más ha pedido olvidar el pasado es el que más lo está explotando para conseguir sus fines.

El Partido Demócrata Cristiano, muy a su pesar, se ha quedado fuera de este forcejeo político, no obstante ser el partido que más dura y objetivamente ha atacado la gestión gubernamental actual. Las divisio-

nes internas —de carácter secular— lo han debilitado, restándole fuerza y credibilidad. Pero también existen indicios fuertes de que ha sido desplazado a un tercer lugar muy marginal por ARENA, al que no le interesa la existencia de un “centro”, el lugar por excelencia de la democracia cristiana. Desde esta perspectiva, la democracia cristiana también pareciera vivir del pasado, al querer volver a ocupar el “centro político” entre las dos extremas de entonces.

Ahora bien, paradójicamente, la democracia cristiana ha colaborado activamente con la polarización al buscar alianzas con ARENA ahí donde no tiene fuerza electoral suficiente para ganar al FMLN o a Convergencia Democrática. Esto no es extraño. Por lo general, este partido hace alianzas con el que le garantice la cuota de poder que no puede asegurarse por sí mismo. Al contribuir de esta manera a la polarización, él mismo se ha cerrado la posibilidad de convertirse en el “centro” entre las dos extremas.

Estados Unidos, por lo tanto, también se ha quedado sumido en la perplejidad. El gobierno estadounidense también es uno de los mayores promotores de los centros políticos. A Washington no le gusta que nadie acumule suficiente poder como para convertirse en la fuerza determinante de la vida de un país; prefiere que el poder esté repartido, no porque esto sea más democrático, sino porque le es más fácil maniobrar para implementar su política exterior. La polarización, por tanto, no es de su agrado; pero tampoco cuenta con una alternativa de “centro”. Los candidatos de ARENA no llenan los requisitos de Washington; tampoco los de la coalición gozan de plena confianza política. Ante esta situación incómoda para la política exterior estadounidense, lo probable es que Washington se “resigne” a seguir conviviendo con ARENA, tal como lo ha hecho en los últimos años, pese a todo lo que sabe sobre dicho partido y sus dirigentes en cuanto a la violación de los derechos humanos. En el mejor de los casos, buscará que la oposición se fortalezca para contrarrestar el poder de ARENA.

Naciones Unidas también debiera estar preocupada porque el proceso de transición ya se le ha salido de las manos. Los resultados actuales no son los previstos en los acuerdos y, aunque éstos pueden convencer a quienes desconocen la situación real de El Salvador, a los incautos y a quienes quieren ser engañados, la verdad es que todavía no ha habido reconciliación, un elemento clave del proceso. Signos positivos como la manifestación de los lisiados de guerra de ambas partes para reclamar sus derechos son aún aislados y débiles. Pese a su mandato, es muy poco lo que Naciones Unidas ha hecho para impulsarla. Sin duda, esta actitud del organismo internacional satisface en gran medida al gobierno, pero en realidad es una traición a las aspiraciones de paz más profundas del pueblo salvadoreño.

La participación activa de la sociedad civil podría convertirse en una fuerza de primera magnitud para impulsar los cambios que el país necesita.

Finalmente, la polarización es muy útil para inmovilizar a una sociedad ya de por sí atemorizada por la delincuencia común y criminal, por el desamparo legal e institucional y por la marginación en la que se la ha mantenido y se la mantiene. Las cúpulas no le permitieron participar en la negociación, tampoco le han dado participación en el proceso de cumplimiento de los acuerdos ni en la reconstrucción nacional. Eso sí, ahora le piden su voto. Sin embargo, las fuerzas sociales comienzan a despertar de su letargo. Una de las novedades de la campaña electoral actual es que la sociedad no se ha conformado con la oferta de los partidos políticos, sino que los gremios de mujeres, de jóvenes, de ecologistas, las organizaciones de derechos humanos, etc., han tomado la iniciativa y han presentado sus propias plataformas a aquéllos. Los partidos políticos, poco convencidos, se han visto obligados a firmarlas.

Esta iniciativa de las fuerzas sociales manifiesta desconfianza hacia los partidos políticos y, en particular, el convencimiento de que no son los que mejor representan las demandas e intereses de las diferentes fuerzas sociales. En la práctica, significa cuestionar una representatividad que hasta ahora se consideraba exclusiva y ejercer sobre ellos una presión eficaz al forzarlos a firmar esas plataformas. Una vez instalado el nuevo gobierno, habría que exigirle el fiel cumplimiento del compromiso adquirido en la campaña electoral. Aquellos que no honren su compromiso deberían ser castigados en la siguiente elección, negándoles el voto. Si esta novedad política cobra fuerza puede permitir a las fuerzas sociales ocupar el lugar que les corresponde en el proceso de democratización —lugar que hasta ahora les ha sido negado sistemáticamente— y al mismo tiempo es una buena posibilidad para colocar la representatividad de los partidos políticos en su justo límite.

La participación activa de la sociedad civil podría convertirse en una fuerza de primera magnitud para impulsar los cambios que el país necesita; sería más libre que los partidos políticos, cuyos intereses y ambición de poder los atan sobremanera y limitan su visión a metas de corto plazo; representaría mejor, tanto por su número como por su representatividad, los intereses de la nación o, por lo menos, de la mayoría; podría convertirse en una fuerza determinante para forzar a las cúpulas políticas a promover la reconciliación nacional; implicaría una participación directa y determinante en el curso del país. En las fuerzas sociales existe aún un recurso importante desaprovechado para impulsar el proceso de transición democrática y para quitar a los políticos y a los

partidos el protagonismo que no les corresponde.

En definitiva, una sociedad consciente, informada y formada es necesaria para superar las relaciones conflictivas que caracterizan a la sociedad salvadoreña en la actualidad, para conseguir una votación madura guiada sólo por el bien común y para avanzar hacia la democratización del sistema político. El voto de una ciudadanía no informada ni madura, aunque puede beneficiar momentáneamente a un partido determinado, es un mal para El Salvador a mediano y largo plazo.



3. Más allá de las elecciones: la reconciliación

Al negociar el final del conflicto armado, tanto en las dirigencias políticas como en la conciencia colectiva se fue desvaneciendo la convicción sobre la necesidad de la reconciliación nacional. La negociación prevaleció como mecanismo único, del cual cada parte sólo se preocupó de sacar la máxima ventaja. La ausencia de reconciliación ya ha llevado al país a una polarización peligrosa, en la cual todo está permitido, incluidas las ilegalidades y la violencia, con tal de impedir que el "enemigo" acceda al poder. Demasiado fácilmente nos estamos acostumbrando a contentarnos con que no maten a la oposición.

La contienda electoral no ha hecho más que ahondar las heridas abiertas por la guerra y, ciertamente, no impulsará la reconciliación. Es más bien la expresión política de la polarización. En este contexto, prescindiendo de quién gane las elecciones, sin reconciliación, lo que vendrá después será la continuación de la guerra, una de las partes desde el poder y la otra desde la oposición, y cada una con sus aliados respectivos.

Si a esto añadimos la fragilidad de la estabilidad económica conseguida por el gobierno actual que depende de las remesas de los salvado-

reños de Estados Unidos y de una ayuda externa que tiende a disminuir de manera alarmante, no es difícil pensar que El Salvador se desliza hacia la ingobernabilidad que caracteriza a la Nicaragua de los noventa. Contrario a lo que puedan pensar los protagonistas de la polarización, y en especial ARENA, esta situación no beneficia a nadie en el mediano y largo plazo.

En el mejor de los casos, se puede aspirar a que el conflicto social se institucionalice, es decir, a que su curso sea más legal y jurídico. Sería lo que los políticos tanto gustan en llamar "poner las reglas del juego". Prescindiendo de que no se trata de un juego, sino de asuntos donde está en cuestión la vida de la mayoría del pueblo salvadoreño; las reglas pretenderían mantener el conflicto dentro de unos límites previsibles y controlables. Pero siempre habría conflicto y de ninguna manera se podría hablar de consolidación de la paz ni de la modernización del país. Esto no quiere decir que no deba haber confrontación ideológica, al contrario, sería una sana práctica democrática para encontrar la solución más razonable y ética a los graves problemas del país. Lo que no es aceptable democráticamente es la confrontación sucia y violenta.

Ahora bien, la polarización ha llegado a tal extremo que a veces ni siquiera esta institucionalización del conflicto parece viable. La ultraderecha sigue representando un obstáculo muy difícil de salvar y la derecha modernizante, en la práctica, se somete a la primera. Así, pues, el único cambio constatable es la posibilidad de que accedan al poder aquellos a quienes antes eso les estaba vedado. Pero incluso esta posibilidad es más teórica que real porque es evidente la determinación para impedirlo. La falsa esperanza del gobierno y de Naciones Unidas de que el cumplimiento de los acuerdos ocurriera de forma paulatina, llevado por su propia dinámica interna y por la inercia del proceso, sin tener ellos que arriesgar mucho y pagar los costos, ha resultado fallida. Lo peor es que se niegan a reconocer que la sociedad hacia la cual nos están empujando no puede resolver los problemas del pueblo salvadoreño.

Por lo tanto, el avance del proceso de transición exige un esfuerzo especial y constante de todos aquellos que efectivamente quieren que el país arribe al término de dicha transición. Esto implica un cambio importante en la verificación del proceso por parte de Naciones Unidas y un esfuerzo especial y constante por parte de las fuerzas sociales. El bien de El Salvador exige, a mediano y largo plazo, un compromiso ineludible con la reconciliación. Este compromiso debe ser asumido por quienes ahora tienen la representación de la sociedad, por los políticos, pero también por las iglesias, los maestros, los sindicalistas, los profesionales, los artistas, los escritores, las universidades, etc.

Es ilusorio pensar que las elecciones, por sí mismas, resolverán la polarización porque éstas apenas se encuentran en el arranque del proceso de democratización. Por lo tanto, las elecciones sólo pueden proporcionar al país un gobierno legítimamente electo y en la medida en que sean libres y limpias, lo cual dado el curso de la campaña es muy cuestionable, un gobierno electo democráticamente. Pero con ello, la transición no avanzará más ni el país será más gobernable.

El esfuerzo que la reconciliación necesita es costoso, puesto que se debe trabajar en contra de las fuerzas que hasta ahora han dirigido el proceso, impidiendo dar este paso tan trascendental para el futuro de El Salvador. Los males no superados aún por el proceso provienen del pasado, pero también son males del presente, especialmente por no haber querido, sabido o podido aprovechar la gran oportunidad para la reconciliación que el pueblo salvadoreño consiguió con gran sacrificio. Las oportunidades para la verdad y el perdón, para dar más participación a las mayorías y para aprovechar las mejores capacidades del pueblo salvadoreño se han desaprovechado y, en buena parte, muy conscientemente. Los acontecimientos capaces de fundamentar la reconciliación se han prostituido.

De ahí que sea tan necesario, y también tan difícil, superar los pasos dados hasta ahora. La experiencia de los dos últimos años ha demostrado claramente que ni la negociación de las cúpulas ni la verificación de Naciones Unidas, con todo lo importante que es su función, han sido suficientes para alcanzar las metas del proceso. El gran obstáculo para la reconciliación nacional siguen siendo las mayorías populares a las cuales se quiere mantener al margen de la vida nacional, en la pasividad y en la ignorancia. No se les quiere otorgar el lugar que les corresponde en el momento de decidir el destino



de El Salvador. Por eso mismo, la participación activa de esas mayorías en el proceso es ahora más necesaria que antes. Para hacerlo no deben esperar la invitación de los partidos políticos, interesados sólo en el voto, sino que ellas son las que deben conquistar el espacio que les corresponde.

Ciertamente, éste no es el mejor momento para la reconciliación. Si no ha habido voluntad para modificar el régimen político, hay mucho menos para introducir cambios importantes en el socio económico. Pero ello no obsta para exigir la reconciliación y comprometerse con ella. No debemos conformarnos con que la oposición no sea asesinada, ni debemos caer en la trampa de comparar únicamente la situación actual con la de hace dos años, ni debemos caer en el engaño creado por los espectáculos millonarios que pretenden ocultar el conflicto social y la injusticia, ya sean éstos de carácter deportivo o foros internacionales donde los invitados se felicitan autocomplacientemente por lo bien que marcha El Salvador. Por lo tanto, hay que luchar no sólo contra los salvadoreños que se oponen a la reconciliación, sino también hay que exigir a la comunidad internacional y, en particular, a Naciones Unidas, cumplir con su compromiso con la reconciliación y la paz verdadera.

Es necesario pensar en otros términos, concretamente, en los términos de las mayorías populares y de su bienestar. Esto implica, en primer lugar, preguntarse por la responsabilidad en lo que ocurre y, en segundo lugar, enfrentar con seriedad y honestidad el problema socio-económico de El Salvador. Aquí radica la gran dificultad para la concertación. Reconciliación significa, por supuesto, que los otros puedan gobernar, pero también significa que todos los salvadoreños tenemos derecho a vivir humana y dignamente en un territorio que es de todos.

El gobierno y el FMLN, por un lado, y Naciones Unidas, por el otro, pusieron sus mayores esfuerzos en la negociación, pero ninguno de ellos se ha dedicado con la misma energía a la reconciliación. Los resultados negativos de esta carencia están a la vista, el proceso cojea. La negociación, aunque ha impulsado algunos cambios importantes en el país, tiene, en sí misma, unas limitaciones graves. El que no se haya buscado ni se esté buscando la reconciliación, agrava aún más las deficiencias que de por sí ya adolece el proceso.

Ciertamente, pretender una reconciliación sin negociar es poco realista e ingenuo, pero también es cierto que negociar sin reconciliar no es humano y la negociación es poco duradera. Lamentablemente, este es el caso actual de El Salvador. La negociación es un mecanismo esencialmente político y busca una solución que sea indirectamente beneficiosa para el país. Sin embargo, la reconciliación es una actitud y una prácti-

ca humana globalizante y busca una solución que beneficie directamente a todo el país, aunque indirectamente resulte beneficiosa para las partes. El problema del país no es únicamente político, ni de un grupo con la exclusión de los demás, sino que es un problema de humanidad y de todos los salvadoreños.

La negociación y la reconciliación son igualmente necesarias. Sin negociación, la reconciliación no tiene concreción, pero aquélla sin ésta no tiene sentido. Sin reconciliación sólo males esperan al país. Sin ella, la negociación se convertirá en un pulso que ganará quien tenga más fuerza, no quien tenga más razón y sobre todo tenderá a reducirse a las partes negociadoras y a ignorar a las mayorías populares. Esto es sumamente grave porque, en definitiva, la negociación sólo tiene sentido si ayuda a que esas mayorías tengan vida.

Un buen principio está en poner signos reconciliadores fundantes que, por su carácter, den paso a otros signos y a otras realidades. Esta tarea, aunque también corresponde a los políticos, debe asumirla la sociedad organizada alrededor de ella e inspirada por ella; pues de aquéllos difícilmente puede esperarse alguna novedad en esto, tal como lo han demostrado en los dos años de acuerdos de paz y lo están demostrando de nuevo en la actualidad, en la campaña electoral.

Pese a lo difícil que pueda resultar reconciliar El Salvador consigo mismo y con su pasado, la tarea sigue siendo necesaria. Es una tarea que ni siquiera se ha intentado con seriedad, no obstante la existencia de tantos diálogos y negociaciones.

San Salvador, 10 de febrero de 1994.